

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL
SALA QUINTA DE DECISIÓN SALA LABORAL

MAGISTRADA PONENTE: MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA

PROCESO	ORDINARIO LABORAL DE ÚNICA INSTANCIA
DEMANDANTE	HERNÁN DARÍO MONTOYA TORO
DEMANDADO	MUNICIPIO DE ENVIGADO y PROTECCIÓN S.A.
PROCEDENCIA	JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO DE ENVIGADO
RADICADO	05266-31-05-001-2020-00341-01
SEGUNDA INSTANCIA	APELACIÓN AUTO
DECISIÓN	DECLARA INADMISIBLE APELACIÓN – EXCEPCIÓN PREVIA DE FALTA DE JURISDICCIÓN

AUTO INTERLOCUTORIO No.030

Medellín, catorce (14) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

En atención a lo previsto en el decreto 806 del 4 de junio de 2020 convertido en legislación permanente a través Ley 2213 de 2022, una vez discutido y aprobado en la SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL el presente asunto, según consta en Acta N°064 de 2022, se procede a dictar AUTO INTERLOCUTORIO en orden a resolver sobre la admisibilidad del recurso de apelación formulado por el apoderado judicial de la parte **DEMANDANTE** contra el Auto del 12 de septiembre de 2022, proferido por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Envigado, dentro del proceso de la referencia.

ANTECEDENTES

El señor **HERNÁN DARÍO MONTOYA TORO** promovió proceso Ordinario Laboral en contra del **MUNICIPIO DE ENVIGADO y PROTECCIÓN S.A.**, a fin de que: 1) Se declare que entre este y la **EMPRESA CÁRNICA DE ENVIGADO - ENVICARNICOS EICE** existió un contrato de trabajo entre el 23 de mayo de 2005 y el 1 de octubre de 2016, tiempo en el que estuvo vinculado en condición de trabajador oficial. 2) Que, en virtud de dicho vínculo, se declare que le asiste derecho a percibir la nivelación salarial, conforme lo establecido en la Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre la citada empresa y **MUNICIPIO DE**

ENVIGADO. 3) Que, en consecuencia, se condene a este último a reconocer y pagar lo adeudado por dicha nivelación, el reajuste de las prestaciones sociales como primas de servicios, vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, y el título pensional correspondiente al reajuste de los aportes, este último, a cancelar con destino a **PROTECCIÓN S.A.** **4)** En concordancia con ello, se ordene a la citada AFP recibir tales recursos. **5)** Así mismo, peticionó del **MUNICIPIO DE ENVIGADO** a indexar los valores correspondientes por nivelación salarial y prestacional de forma retroactiva, junto al pago de la sanción moratoria reglada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y la establecida en el Decreto 797 de 1949, o en subsidio de esta la indexación de las sumas resultantes. (f. 4 a 13 Archivo 01 ED).

Notificada las entidades accionadas, procedieron a contestar la demanda, oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones (f. 1 a 10 Archivo 03 ED y 1 a 23 Archivo 05 ED).

Dentro de sus argumentos de defensa, el **MUNICIPIO DE ENVIGADO** formuló la excepción previa de “*falta de jurisdicción y competencia*” sustentada en que, al tenor de la información entregada por el agente liquidador de la empresa ENVICÁRNICOS, la controversia no tiene nada que ver con un contrato de trabajo, en la medida que el demandante era un empleado público de libre nombramiento y remoción, careciendo el Juez Laboral de jurisdicción para resolver sobre el asunto, como quiera que quien debe conocerlo es la jurisdicción contenciosa administrativa, de acuerdo con el numeral 2° del artículo 104 de la Ley 1437 de 2011 (f. 1 a 23 Archivo 05 ED).

PROVIDENCIA APELADA

En audiencia de que trata el artículo 77 CPLSS, en la etapa pertinente, a través de Auto del 12 de septiembre de 2022, el Juzgado de primer grado declaró probada la excepción previa propuesta por la pasiva, y, en consecuencia, remitió el expediente para que fuese repartido entre los Juzgados Administrativos del Circuito de Medellín,

Fundamentó su decisión en que, a la luz de lo establecido en los numerales 1° y 4° del artículo 2° del CPLSS, los conflictos a conocer en la Jurisdicción Ordinaria en su Especialidad Laboral, corresponden a los que deriven directa o indirectamente del contrato de trabajo, o las controversias de seguridad social en la que intervengan empleadores o afiliados y entidades del sistema. Por su parte, recordó que a la Jurisdicción Contenciosa le corresponden los conflictos devenidos de la relación legal y reglamentaria.

En ese sentido, expuso que la competencia en el ámbito laboral la da el propio demandante al señalar la existencia de un contrato de trabajo, independiente de que la accionada sea una entidad pública, según se ha dicho en Sentencias SL2288-2018, SL21080-2017.

Expuso entonces que, en el particular el demandante alega haber prestado sus servicios en la empresa ENVICÁRNICOS EICE, resaltando que el régimen jurídico

de estas aparece reglado en el Decreto 3135 de 1968, el cual dispone que por regla general sus servidores son trabajadores oficiales, y excepcionalmente empleados públicos, según lo definido en los estatutos, citando para el efecto la Sentencia C-283 de 2002, a fin de concluir que, en el caso del demandante, a través de la Resolución No. 100 del 27 de diciembre de 2006, mediante la cual se realizaron incorporaciones en la planta de cargo, entre estas, la del citado en calidad de libre nombramiento y remoción, seguido de la consecuente acta de posesión, coligiendo, a partir del contenido de la documental descrita, que el actor ostentó la calidad de empleado público, a lo que se suma que en el proceso no se está alegando la calidad de trabajador oficial (Archivo 17 ED).

RECURSO DE APELACIÓN

El apoderado judicial de la PARTE DEMANDANTE interpuso recurso de apelación en contra de la decisión en comento, manifestando que la empresa ENVICÁRNICOS EICE fue constituida como Empresa Industrial y Comercial del Estado, rigiéndose por lo establecido en el Decreto 3135 de 1968, que estableció como regla general que los servidores de estas entidades se tienen por trabajadores oficiales, mientras que, quienes desempeñen actividades de dirección o confianza ostentan la condición de empleados públicos, cuestiones que no están muy precisas en la documental aportada, en la que el accionante aparece nombrado en un cargo de libre nombramiento y remoción, sin que esto simplemente permita colegir que se trata de un empleado público.

Lo anterior es importante resaltó, en razón a la posibilidad que tienen los trabajadores oficiales de negociar convenciones colectivas de trabajo, aspecto que precisamente es el punto a elucidar con este proceso, es decir, si el actor se beneficia de la convención suscrita al interior de la empresa, correspondiéndole dirimir esta disyuntiva a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral (Archivo 17 ED).

PROBLEMA (S) A RESOLVER

Visto lo anterior, debe decidir la Sala, si la decisión a través de la cual se declaró probada la excepción de “falta de jurisdicción y competencia” es susceptible de apelación.

CONSIDERACIONES

Sea lo primero reseñar que, en principio, por virtud de lo reglado en el numeral 3º del artículo 65 del CPTSS, según el cual el auto que decida sobre excepciones previas es susceptible del recurso de apelación, esta Sala de Decisión es competente para resolver la alzada propuesta.

Sin embargo, el entendimiento que debe dársele a la posibilidad de impugnar la decisión que resuelva sobre los medios dilatorios propuestos, tendrá vocación de ser tramitada, **siempre que la decisión atacada no sea la que declara la falta de jurisdicción y competencia del funcionario judicial, puesto que, aquella**

determinación podría dar lugar a iniciar un eventual conflicto negativo de competencia, mismo que encuentra su trámite en el artículo 139 CGP que reza:

*“(…) **ARTÍCULO 139. TRÁMITE.** Siempre que el juez declare su incompetencia para conocer de un proceso ordenará remitirlo al que estime competente. Cuando el juez que reciba el expediente se declare a su vez incompetente solicitará que el conflicto se decida por el funcionario judicial que sea superior funcional común a ambos, al que enviará la actuación. **Estas decisiones no admiten recurso.** (…)”* (Negrilla y Subraya de la Sala).

Lo anterior ha sido materia de estudio por la Sala de Casación Laboral de la CSJ, conforme lo establecido en Sentencias como las STL17139-2014, STL15822-2017, STL10772-2017, STL14348-2018 y la STL1329-2019, resaltándose de la última lo siguiente:

“(…) “En primer lugar, debe la Sala precisar que no comparte lo asentando por el juez de primera, en cuanto que no se agotó por el accionante, a través de su apoderado, el recurso de apelación, como quiera, que si bien el artículo 65 del CPLSS, modificado por el 29 de la Ley 712 de 2001, se establece frente a que autos procede el recurso de apelación, señalándose en el numeral 3, «El que decida sobre las excepciones previas», también lo es que dicha disposición debe interpretarse en concordancia del inciso 1 del artículo 139 del Código General del Proceso, que reza: «Siempre que el juez declare su incompetencia para conocer de un proceso ordenará remitirlo al que estime competente. Cuando el juez que reciba el expediente se declare a su vez incompetente solicitará que el conflicto se decida por el funcionario judicial que sea superior funcional común a ambos, al que enviará la actuación. Estas decisiones no admiten recurso», es decir, que contra el auto que declara la falta de competencia no procede recurso de apelación, pues así lo ha interpretado la jurisprudencia de esta Sala, entre otros, en proveído del CSJ STL3652-2013 (…)”

De igual forma, recientemente dicho criterio fue ampliado y acentuado por el Alto Tribunal en Sentencia STL11371-2022 en la cual consideró:

“(…) Con soporte en las normas en precedencia citadas, de su lectura desprevenida, se puede advertir, sin dificultad alguna, que los efectos jurídicos de la declaratoria de las excepciones previas de «falta de jurisdicción y competencia» y «cláusula compromisoria», son disímiles entre sí, en la medida en que, con la primera, por disposición de los artículos 101 y 139 del Código General del Proceso, la autoridad judicial que declare su falta de competencia debe remitir las diligencias al que estime competente, situación que no afecta la validez de la actuación cumplida hasta ese momento, mientras que, con la segunda, da lugar a la terminación del proceso, en virtud de lo preceptuado en el numeral 2 del inciso 3 del artículo 101 ibidem.

Así, para esta Sala es clara la vulneración del debido proceso de la convocante por parte del juez accionado, dado que dio aplicación a la medida más lesiva

a la parte actora, tras resolver en primer lugar la excepción previa de «cláusula compromisoria», **pues con ella dio por terminado el proceso, sin advertir que con ello podía vulnerar los derechos fundamentales de índole laboral reclamados ante esta jurisdicción, cuando lo procedente era entrar a resolver, en primer término, lo atinente a la excepción previa de falta de jurisdicción y competencia», evento en el cual, tras concluir el Juez Promiscuo del Circuito de Chinú que era próspera dicha excepción, por mandato legal, debió haber remitido el proceso a la Jurisdicción Indígena del Pueblo Zenú,** autoridad que consideró la competente para definir el litigio, oportunidad en la cual podría i) avocar el conocimiento del proceso, lo que conllevaría a que resolviera la excepción previa de «cláusula compromisoria», o ii) proponer un conflicto negativo de competencia, que sería resuelto por el Superior Funcional a ambos.(...)”

De lo expuesto, se entiende de manera diáfana que, en aquellos eventos en los que el Juzgador declare la falta de jurisdicción o competencia, incluso cuando esta decisión provenga de la resolución de la excepción previa respectiva, aquella determinación se torna inapelable, al tenor de lo señalado en el artículo 139 CGP, pues lo procedente es remitir el proceso a la autoridad que se considere con legitimación para tramitar tal controversia, como en este caso lo dispuso el Juzgado de primera instancia al enviar las diligencias para su conocimiento a los Juzgados Administrativos. Caso contrario, estima la Sala, ocurre cuando la decisión sobre la excepción previa resulta no probada, en tanto al proponerse la alzada, con su posterior resolución, no se estaría contraviniendo la eventualidad de que el competente decida en quien radica la obligación de conocer de determinado asunto.

En ese orden de ideas, carece esta Sala de competencia funcional para resolver en segunda instancia el asunto apelado, cuestión que incluso ha sido precisada por la Corte Constitucional, por ejemplo, en la Sentencia T-685 de 2013, donde indicó:

“(...) 25.3 En este sentido, y como quedó expuesto..., el Tribunal no podía conocer del recurso de apelación presentado por el demandante, por cuanto contra dicha providencia no es procedente este recurso, en primer lugar porque así lo mandan las normas que regulan el conflicto de competencia por falta de competencia, aplicables analógicamente a este supuesto, y en segundo lugar, porque se estaría atribuyendo una competencia que no tiene, cual es, la de definir cuál es la jurisdicción competente para el conocimiento de un determinado asunto.

De este modo, el Tribunal accionado no tenía competencia para pronunciarse acerca de si se tenía o no jurisdicción para resolver el caso en litigio, incurriendo dicha providencia en un defecto orgánico que impone su salida del ordenamiento jurídico y el mantenimiento de la decisión del Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Cartagena que dispuso la remisión del expediente a la jurisdicción competente”

Así las cosas, corresponde declarar inadmisibles los recursos de apelación y disponer la devolución del expediente al Juzgado de origen para lo de su cargo.

Sin costas en esta instancia por no aparecer causadas.

Sin que sean necesarias más consideraciones, la **SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN**,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR inadmisble el recurso de apelación propuesto por la parte demandante en contra del Auto del 12 de septiembre de 2022, a través de cual se declaró probada la excepción de “*falta de jurisdicción y competencia*”, propuesta por el **MUNICIPIO DE ENVIGADO**, dentro del proceso que sigue el señor **HERNÁN DARÍO MONTOYA TORO** en contra de la citada entidad y **PROTECCIÓN S.A.**

SEGUNDO: Sin costas en esta instancia.

TERCERO: Por Secretaría, **DEVUÉLVASE** el expediente contentivo del citado proceso al Juzgado de Origen para lo de su cargo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Los Magistrados,


MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA
Magistrada


VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO
Magistrado


SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE
Magistrada

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN –
SALA LABORAL - HACE CONSTAR

Que la presente providencia se notificó por estados N ° 226 del 15
de diciembre de 2022

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/100>